



947

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES.
EXPEDIENTE NÚMERO: ESAF/DGJ/PAR/037/08-16
SUJETO A PROCEDIMIENTO: C.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
MUNICIPIO: TLALTIZAPAN, MORELOS.

--- En la ciudad de Cuernavaca, Morelos; a tres de mayo de dos mil dieciocho. ---

V I S T O S los autos para resolver el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades radicado bajo el expediente número ESAF/DGJ/PAR/037/08-16, instaurado por las observaciones realizadas al ciudadano en su carácter de sujeto de responsabilidades, al haber sido Presidente Municipal de Tlaltizapán, Morelos, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010: -----

RESULTANDO



I.- Con fecha **veintidós de agosto de dos mil dieciséis**, se recibió en la Dirección General Jurídica oficio número ESAF/1759-01/2016, la instrucción del Auditor General de iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, el cual es en alcance al oficio número ASF/3111/2014, recibido con fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, firmado por el Licenciado LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Auditor Superior de Fiscalización, en el cual se remitió la documentación derivada de la Auditoría practicada al Municipio de Tlaltizapán, Morelos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la finalidad de iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades al ciudadano en su carácter de Presidente Municipal. -----

II.- Con fecha **veintitrés de agosto de dos mil dieciséis**, se radicó el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, que se registró con el número **ESAF/DGJ/PAR/037/08-16**, teniéndose como sujeto de responsabilidad al ciudadano por haber sido Presidente Municipal de Tlaltizapán, Morelos, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. ---

III.- El día cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se notificó el inicio del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades al ciudadano

informándole su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la audiencia de ley, lo que a su derecho conviniere. -----

IV.- Con fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, prevista por el artículo 61 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, a la que compareció personalmente el ciudadano quien exhibió y ratificó su escrito de contestación al Procedimiento Administrativo de Responsabilidades. -----

En virtud de las manifestaciones anteriores el Licenciado JOSÉ VICENTE LOREDO MÉNDEZ, Auditor General; acordó tenerse por presentado en tiempo y forma al ciudadano con su escrito de contestación al presente procedimiento, realizando las manifestaciones que a su derecho correspondieron. -----

Así mismo respecto de los medios de prueba ofrecidos en el mismo escrito de contestación, esta autoridad acordó el emplazamiento de terceros llamados a procedimiento corriéndoles traslado del auto de radicación. -----

V.- Mediante el mismo auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se tienen por admitidas las documentales **PUBLICAS, INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA** en los términos en que fueron ofrecidas. -----

VI.- Por auto de fecha cuatro de marzo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, prevista por el artículo 61 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, a la que compareció personalmente como tercero llamado a juicio el ciudadano quien fungió como Contralor Municipal; quien exhibió y ratificó su escrito de contestación al Procedimiento Administrativo de Responsabilidades. -----

VII.- Por auto de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se acuerda hacer efectivo el apercibimiento del acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, de tener por precluido su derecho del ofrecimiento como tercero llamado a juicio del ciudadano quien fungió como Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública municipal, toda vez que no proporcione domicilio real y cierto del ciudadano para poder emplazarlo a procedimiento. -----





948

VIII.- Por auto de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, se acuerda hacer efectivo el apercibimiento del acuerdo de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, de tener por precluido su derecho del ofrecimiento como tercero llamado a juicio del ciudadano quien fungió como Tesorero municipal, toda vez que no proporciono domicilio real y cierto del ciudadano para poder emplazarlo a procedimiento. -----

IX.- Por auto de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta del escrito con número de folio ciento setenta y cinco (175), mediante el cual el defensor particular del sujeto a procedimiento formula los alegatos, y por así permitirlo el estado procesal que guarda los presentes autos, se **ACUERDA:** Se declara cerrada la instrucción y se **ORDENA TURNAR A RESOLVER;** por lo que: -----



CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto y, en su caso, para imponer las sanciones que correspondan, en términos de lo dispuesto por los artículos 109, fracción III, segundo párrafo y 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción XLVII, 84, apartado A, fracciones IV y VII, 134 y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; SÉPTIMO, DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIOS del Decreto número dos mil sesenta y dos por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación a la creación de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5259 de fecha treinta de enero de dos mil quince; la Vigésima Tercera Disposición Transitoria de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5514 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete; el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5286 de fecha trece de mayo de dos mil quince;

10, fracciones XIV y XV, 16, fracciones IV, XVII y XVIII, 36, fracciones V y VI, 60 y 61, fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos; 26, 27, 28, 29, 34, 35 y 65 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 10, 11, fracción XV, 28, fracción X, 29 y 31, fracción I del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización.

SEGUNDO. Legislación aplicable. En términos de la VIGÉSIMA TERCERA Disposición Transitoria de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5514 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete; del artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5286 de fecha trece de mayo de dos mil quince, vigente al día siguiente, los asuntos surgidos durante la vigencia de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos que abroga y su Reglamento Interior, así como la revisión de las cuentas públicas y los procedimientos administrativos de responsabilidades, continuarán tramitándose por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización en los términos de los referidos ordenamientos hasta su conclusión, aplicando en su caso, solo a petición de parte aquello que sea en beneficio de las Entidades Fiscalizadas respecto a la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos.

TERCERO. Objeto del procedimiento administrativo. El presente procedimiento administrativo tiene como finalidad fundamental, verificar los actos de la autoridad administrativa que se consideran contrarios a derecho; en este tenor, la impugnación se dirige a obtener una ulterior revisión, con el objeto de que el mismo órgano técnico de fiscalización, los revoque, confirme o modifique, si se encuentra comprobada la ilegalidad o inoportunidad de los mismos, así como la existencia o inexistencia de responsabilidades administrativas y resarcitorias de el ciudadano _____ en su carácter de Presidente Municipal de Tlaltizapán, Morelos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, por:

- A) No haber solventado las observaciones realizadas durante el procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública 2010 del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, de las que se presume la existencia de daños o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública o al patrimonio de la entidad fiscalizada, y





949

B) Haber infringido las premisas normativas que regulan la administración y manejo de los recursos públicos.

Y en caso que así proceda, fincar el pliego definitivo de observaciones e imponer las sanciones que correspondan a la persona sujeta a procedimiento.

CUARTO. Fijación de la Litis o debate. La materia de la Litis se constriñe a determinar si como se estableció en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2010 del Municipio de Tlaltizapán, Morelos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, notificado el veintisiete de febrero de dos mil trece, en relación con el Pliego de Observaciones de fecha veintiséis de abril de dos mil doce,

en su carácter de Presidente Municipal de Tlaltizapán, Morelos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, incumplió con los plazos establecidos y el marco normativo aplicable y generó daños a la Hacienda Pública Municipal, o por el contrario, como lo sostiene en su escrito presentado en fecha once de junio de dos mil dieciocho, no ha lugar a responsabilidad administrativa por haber operado en su favor la prescripción.



GRESO DE MORELOS

En su defensa, *adujo: "En el caso que nos ocupa Usted C. LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MÉNDEZ Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, debe darse cuenta que los hechos que se me imputan y con los que pretende usted fincarme alguna responsabilidad SE ENCUENTRAN PRESCRITOS, toda vez que como usted mismo la ha señalado en el Pliego de Observaciones de la Auditoría que llevo a cabo fue del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, en estas condiciones usted tiene la obligación de analizar la figura jurídica de PRESCRIPCIÓN prevista en EL ARTÍCULO 71 EN SUS FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTABA VIGENTE EN AÑO 2010 que es cuando ocurrieron las supuestas irregularidades que se me imputan y con los cuales se me sujetan a este procedimiento, pero además de acuerdo al ultimo párrafo del artículo 72, de la disposición invocada, ES SU OBLIGACIÓN EL ESTUDIO DE LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO NO SOLAMENTE A INSTANCIA DE PARTE COMO SE LOS ESTOY SOLICITANDO. -----*

EN ESTAS CONDICIONES PREVIO A EMITIR ALGUNA SANCIÓN EN MI CONTRA AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DEBE USTED DARSE CUENTA QUE SE ENCUENTRA PRESCRITO SU DERECHO PARA PODERME SANCIONAR; por lo que, lo primero que usted debe analizar es que si los hechos que se me imputan ocurrieron del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, a este fecha, han transcurrido siete años tres meses, en consecuencia esta prescrita la

facultad que usted tiene para poder sancionar por la comisión de cualquier responsabilidad que pudiera haberse cometido, usted tiene también la obligación de analizar la hipótesis del artículo 69 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, vigente en el año 2010, la cual señala:

Artículo *69.- Las facultades de la Auditoría Superior para fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere esta Ley prescribirán en cinco años.

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo.

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al notificarse el inicio del procedimiento establecido en la Ley.

Cualquier gestión de cobro que haga la autoridad competente al responsable, o trámite que realice la Auditoría Superior, interrumpe la prescripción de la sanción impuesta, prescripción que, en su caso, comenzará a computarse a partir de dicha gestión.

Las responsabilidades de carácter civil y penal que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables

En estas condiciones antes de emitir cualquier sanción en mi contra debe analizar la hipótesis de los artículos 71 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el año 2010, y con ello se dará cuenta que esta ya quedo prescrito el plazo de las acciones que pudiera ejercitar en su carácter de autoridad sancionadora en mi contra, pues suponiendo sin conceder que las imputaciones fueran graves como las previstas en el **ARTÍCULO 28 DE LA MENCIONADA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LA ACCIÓN PRESCRIBE EN 5 AÑOS, Y A LA FECHA HAN TRANSCURRIDO SIETE AÑOS TRES MESES**, por lo que ya está prescrita su facultad para poderme sancionar también debe analizar las hipótesis previstas en el artículo 69 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos vigente en el año 2010, disposición jurídica transcrita en la cual se señala a usted sus facultades para fincarme alguna responsabilidad e imponerme alguna sanción prescriben en 5 años por lo que también con esta disposición esta prescrita su facultad para poderme sancionar -----

En estas condiciones expuestas y por tratarse de una excepción de previo y especial pronunciamiento que es este tipo de excepciones conocidas como perentorias, es decir que al ser procedentes terminan con la acción que se ejercita, **RAZÓN POR LA CUAL LE PIDO QUE PREVIO A CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO EN MI CONTRA, ANALICE, ESTUDIE Y RESUELVA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN QUE LE ESTOY PLANTEANDO, Y LA DECLARE PROCEDENTE COMO LO ES...** -----





950

Así, el debate queda fijado en términos de las aseveraciones realizadas con base en el principio de contradicción. -----

Sin que resulte necesario reproducir la contestación que a cada observación realizó con la condición que se aborde su estudio en lo particular. -----

Tiene sustento la consideración anterior, por similitud jurídica, en la siguiente tesis de jurisprudencia:

Época: Novena Época
Registro: 164618
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Mayo de 2010
Materia(s): Común
Tesis: 2a./J. 58/2010
Página: 830



CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.

QUINTO. Carga de la prueba. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción. -----

Una consecuencia procesal de dicho principio, entre otras, es **desplazar la carga de la prueba a la autoridad**, en atención al derecho al debido proceso. -----

La tesis de jurisprudencia es del tenor siguiente:

Época: Décima Época
Registro: 2006590
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 43/2014 (10a.)
Página: 41

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

Tesis y/o criterios contendientes:



951

Tesis 1a. XCIII/2013 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LA APLICACIÓN DE ESTE DERECHO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DEBE REALIZARSE CON LAS MODULACIONES NECESARIAS PARA SER COMPATIBLE CON EL CONTEXTO AL QUE SE PRETENDE APLICAR." aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 968.

Tesis 1a. XCVII/2013 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, NO VULNERA ESTE DERECHO EN SUS VERTIENTES DE REGLA DE TRATAMIENTO, REGLA PROBATORIA Y ESTÁNDAR DE PRUEBA." aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 967.

Tesis 2a. XC/2012 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CONSTITUYE UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL -APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL." aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1687, y

Tesis 2a. XCI/2012 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO ES UN PRINCIPIO APLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR." aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1688.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el número 43/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

Nota: La tesis aislada P. XXXV/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Esta tesis se publicó el viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

En el mismo sentido, dada la aplicabilidad del principio de presunción de inocencia, el método de valoración del acervo probatorio que deberá utilizarse en el presente procedimiento administrativo sancionador de responsabilidades debe ser acorde con aquel principio, a efecto de verificar que los elementos de convicción obrantes en autos –por sus características– reúnan las condiciones para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de



que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contra indicios que den lugar a una duda razonable sobre la responsabilidad que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. - - -

Apoyo la consideración anterior, por identidad de razón jurídica, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región al resolver el amparo directo 37/2014 (cuaderno auxiliar 790/2013) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes:

Época: Décima Época
Registro: 2006505
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: (III Región) 4o.37 A (10a.)
Página: 2096

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO ACORDE CON ÉL.

De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", se advierte que los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consagran los principios del debido proceso legal y acusatorio, los cuales resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes: 1. Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar probatorio o regla de juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se define como disciplinario al desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una resolución sancionatoria de una conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancionador deriva de la





competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con la penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas las similitudes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar los elementos de convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contra indicios que den lugar a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

Amparo directo 37/2014 (cuaderno auxiliar 790/2013) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Del Toro y Asociados, S.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimentel. Secretario: Abel Ascencio López.

Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que las diversas 1a. XCIII/2013 (10a.), 1a. XCIV/2013 (10a.), 1a. XCV/2013 (10a.), 1a. XCVI/2013 (10a.) y 1a. XCVII/2013 (10a.), de rubros: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LA APLICACIÓN DE ESTE DERECHO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DEBE REALIZARSE CON LAS MODULACIONES NECESARIAS PARA SER COMPATIBLE CON EL CONTEXTO AL QUE SE PRETENDE APLICAR.", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL.", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA.", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA." y "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, NO VULNERA ESTE DERECHO EN SUS VERTIENTES DE REGLA DE TRATAMIENTO, REGLA PROBATORIA Y ESTÁNDAR DE PRUEBA.", que fueron objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 200/2013, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 28 de enero de 2014, de la que derivó la tesis de título y subtítulo: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON Matices o modulaciones."

Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



SEXTO. Relación de pruebas. Sentado lo anterior, se procede a realizar la relación de las pruebas existentes en los autos, relacionadas con las observaciones no solventadas:

1. DOCUMENTAL PÚBLICA.
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
3. LA PRESUNCIONAL.

SÉPTIMO. Valoraciones individual y conjunta de las pruebas. Los medios de convicción que integran el presente expediente tienen el valor probatorio que les asignan los artículos 388, 454, 490, 493, 494, 495, 496, 497 y 499 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, según su artículo 68, con el fin de establecer si resultan aptos y suficientes en términos de la regla general contenida en los artículos 60 y 61, fracción II de la Ley invocada, para acreditar los elementos de las causas legales de responsabilidad administrativa y resarcitoria por las que se instruyó este procedimiento. -----

En el análisis de cada causa de responsabilidad se verificará si los medios de convicción reúnen las condiciones para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contra indicios que den lugar a una duda razonable sobre la responsabilidad que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora.

OCTAVO. Antes de entrar al análisis de los elementos que configuran la causa legal de responsabilidad y conclusiones, es necesario atender las defensas y excepciones que opone al ciudadano las cuales se deducen de su escrito de contestación, concretamente la PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES PARA FINCAR RESPONSABILIDADES E IMPONER SANCIONES, misma que resulta ser de Previo y Especial Pronunciamiento, por lo que en este momento se procede a analizar la prescripción invocada por el Servidor Público Sujeto a Procedimiento, para lo cual se determina que la legislación aplicable es la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, la cual contempla la Prescripción en su artículo 69, el cual textualmente dice: "*Artículo *69.- Las facultades de la Auditoría Superior para fincar responsabilidades*





953

e imponer las sanciones a que se refiere esta Ley prescribirán en cinco años. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al notificarse el inicio del procedimiento establecido en la Ley. Cualquier gestión de cobro que haga la autoridad competente al responsable, o trámite que realice la Auditoría Superior, interrumpe la prescripción de la sanción impuesta, prescripción que, en su caso, comenzará a computarse a partir de dicha gestión. Las responsabilidades de carácter civil y penal que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables..."



De acuerdo con lo anterior, la prescripción operará transcurridos cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo, en el caso particular que se trata el presente Procedimiento, la cuenta pública objeto de fiscalización está limitada al principio de anualidad, por lo que es de carácter continuo, así tenemos que el momento en que comenzó a operar la prescripción fue el momento en que cesaron los actos, es decir el día treinta y uno de diciembre de dos mil diez y se completó el día treinta y uno de diciembre de dos mil quince.

Transcurriendo el plazo de prescripción de cinco años, que concluyó el día treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, sin que haya sido interrumpido por ningún medio legal o trámite, realizado por la Autoridad competente, toda vez que el auto de radicación se dictó el día veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, sin embargo la notificación del inicio del Procedimiento que es el acto procesal que interrumpe el plazo de prescripción, se practicó hasta el día dos de diciembre de dos mil dieciséis, es decir tiempo después de haber operado la prescripción,

"PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA IMPONER SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. SÓLO SE INTERRUMPE CON LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA HECHA AL

AFECTADO. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en su artículo 75 preceptúa que: "Las facultades del superior jerárquico y de la contraloría general para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces al salario mínimo diario vigente en el Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo; y II. En los demás casos prescribirán en tres años. De la norma transcrita se advierte que el ejercicio de las facultades del superior jerárquico y de la contraloría general del Estado, para imponer sanciones en el procedimiento administrativo inicia a partir de que la autoridad tiene conocimiento de las irregularidades administrativas en que incurrió el servidor público o a partir del momento en que éstas hubiesen cesado, si fuesen de carácter continuo, y la resolución que en su caso imponga la sanción deberá ser dictada y notificada antes de que se consuma el plazo establecido en el artículo 75 de la ley en comento, es decir, antes de que opere en favor del afectado la figura de la prescripción, pues ésta sólo puede interrumpirse con la notificación a éste de la resolución en que se le imponga alguna sanción, ya que el hecho de que la resolución relativa esté fechada por la autoridad sancionadora dentro del término a que alude el numeral en comento es irrelevante, porque no tiene el efecto de interrumpir el lapso de la prescripción, por ser una actuación unilateral que carece de certeza jurídica, por cuanto al no haber salido del ámbito de una de las partes, es factible el acomodo de la fecha de tal resolución para aparentar que se hubiese emitido antes de que corra el término prescriptivo; por consiguiente, será la notificación de la resolución que contenga la sanción impuesta al servidor público la que interrumpa ese término, porque es en esa fecha cuando el afectado tiene conocimiento del castigo que le impone la autoridad por la falta motivo del procedimiento administrativo seguido en su contra, pues por su naturaleza la resolución en cuestión sólo puede afectar al sancionado cuando ésta le es notificada y no antes, de manera tal que el plazo prescriptivo sólo podrá interrumpirse con la notificación de la resolución hecha al sancionado, si ello ocurre dentro del lapso correspondiente a que alude el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas."



En tales circunstancias es procedente declarar que ha operado la prescripción en el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, en favor de
quien fungió como Presidente Municipal,
quien fungió como Tesorero Municipal,
quien fungió como Director de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obra Pública Municipal y quien fungió
como Contralor Municipal, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2010, quedando sin efectos la facultad sancionadora de esta Autoridad respecto



954

de las observaciones no solventadas y son materia del presente procedimiento Administrativo de Responsabilidades. -----

Por lo anterior no es necesario entrar al estudio de cada una de las pruebas ofrecidas y desahogadas en el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, toda vez que la facultad sancionadora de esta Autoridad ha quedado extinta desde el momento en que operó la prescripción. -----

NOVENO. Inexistencia de responsabilidad. Por las razones y fundamentos expuestos, con apoyo en el artículo 61, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se resuelve que son inexistentes las responsabilidades administrativas y resarcitorias imputadas al ciudadano

quien fungió como Presidente Municipal,

quien fungió como Tesorero Municipal,

quien fungió como Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y

Obra Pública Municipal y

quien fungió como

Contralor Municipal, en el presente procedimiento y por las causas consideradas para su inicio, no habiendo lugar a fincar pliego definitivo de observaciones ni a imponer sanción alguna.



DÉCIMO. Nuevas causas de responsabilidad o de otras personas. En términos del artículo 61, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, que a la letra dice:

Artículo 61.- El fincamiento de responsabilidades resarcitorias, multas y sanciones, se sujetará al procedimiento siguiente:

III. Si celebrada la audiencia la Auditoría Superior advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otras audiencias:

Y atento al contenido de la presente resolución, no pasan inadvertidas las imputaciones realizadas en el pliego de observaciones al al ciudadano presidente municipal de Tlaltzapán, Morelos, respectos a sendos incumplimientos atribuidos en las observaciones no solventadas. -----

No obstante, se debe considerar que, en cuanto a dichas imputaciones, las facultades de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del

Estado de Morelos se encuentran prescritas conforme al artículo 69 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que no ha lugar a la formulación de causa en su contra. -----

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 61, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara que ha operado la prescripción en el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando OCTAVO de esta resolución. -----

SEGUNDO. Las facultades sancionadoras de esta Autoridad administrativa han quedado extintas por haber operado la prescripción para sancionar a los Servidores Públicos. -----

TERCERO. No ha lugar a iniciar procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de los entonces titulares del H. Ayuntamiento Tlaltzapán, Morelos, por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando OCTAVO de esta resolución. -----

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. -----

Así definitivamente lo resolvió y firma el Licenciado **JOSÉ VICENTE LOREDO MÉNDEZ**, Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, auxiliado del Licenciado **CÉSAR ADRIÁN MENDOZA CAPETILLO**, Director General Jurídico y del Licenciado **JUAN MORENO MONTERO**, Director de Responsabilidades, con quienes legalmente actúa y hace constar. -----

JVLM/CAMC/DAU/oidb



----- NADA VÁLIDO DESPUÉS DE ESTA LÍNEA -----